



El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Villami, Jenaro

Caso Iguala: la crisis del sexenio

El Cotidiano, núm. 189, enero-febrero, 2015, pp. 31-36

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32533819004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Caso Iguala: la crisis del sexenio

Jenaro Villamil*

La noche del 26 de septiembre, un grupo de poco más de 50 estudiantes de primero y segundo grado de Ayotzinapa buscaban “botear” para dirigirse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, según la versión oficial. No imaginaron que iban a ser perseguidos, balaceados, secuestrados, torturados, incendiados, como en una réplica del Holocausto nazi al estilo mexicano, en algún paraje de Guerrero. El móvil de este crimen colectivo no quedaba claro a principios de noviembre de 2014. Sólo se les adjudicó a los sicarios y matones de los Guerreros Unidos que se las “cobraron” contra normalistas que ni estaban dedicados al narcotráfico ni afectaban su negocio. Menos se esperaba que este episodio creciera como una hoguera nacional hasta convertirse en la tragedia mexicana más vergonzosa y humillante para una sociedad anestesiada por el supuesto Mexican Moment.

Grietas de la crisis

Entre junio y septiembre de 2014, tres episodios concatenados agrietaron la fachada del avance del gobierno de Enrique Peña Nieto como un gran reformista: la matanza de 22 jóvenes en una bodega del municipio mexicano de Tlatlaya el 30 de junio; el asesinato del diputado federal priísta Gabriel Gómez Michel el 24 de septiembre, cuyo cuerpo fue hallado en Zacatecas, calcinado y con claros indicios de una venganza del narcopoder; y el episodio que abrió las compuertas del infierno: la fiesta de las balas en el municipio guerrerense de Iguala, entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre.

* Periodista.

Los sucesos de Iguala fueron presentados como un enfrentamiento más entre presuntos narcos, o jóvenes con sospecha de serlo, con elementos policiacos. Hubo seis muertos en el primer día, pero la desaparición masiva de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa le dio otro enfoque y otra dimensión a los hechos.

No era un caso más. No se trataba de jóvenes vinculados al crimen. No eran policías comunes sino todo un cuerpo de seguridad municipal al servicio del cártel Guerreros Unidos. Sucedió en la entidad más vigilada por el ejército y que ha recibido mayores recursos por parte del gobierno federal para enfrentar las contingencias ambientales de 2013 y para promoverlo como su modelo de política de desarrollo social a través de la

Cruzada Nacional contra el Hambre. El secuestro y asesinato masivos de jóvenes normalistas desembocó en la peor crisis de Estado que se haya vivido en los últimos años.

En medio de estos hechos violentos ocurrió otro episodio de desencuentro y tensión del gobierno, pero con un alto representante de la élite económica: Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, propietario del 80% del cobre a nivel mundial y uno de los más enigmáticos e impunes magnates mexicanos. El 6 de agosto, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó al menos 40 millones de litros de lixiviados de cobre —una sustancia de ácido sulfúrico y metales pesados— al Río Sonora, contaminando 270 kilómetros de éste. La contingencia ambiental desembocó en un enfrentamiento

entre el gobierno federal, el Grupo México y el gobierno panista de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés, quien además inició una persecución contra la comunidad yaqui al encarcelar a Mario Luna y a otros dirigentes que se oponen a la construcción de una presa que afectará sus tierras. El desencuentro con Larrea culminó en la separación del magnate del Consejo de Administración de Grupo Televisa, por presunta deslealtad con la empresa de Azcárraga Jean, ya que Grupo México se inscribió a través de su filial de cines Cinemex para la licitación de la segunda y tercera cadena de televisión.

El desarreglo con el empresario –que salió bien librado de la muerte de 22 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, de la quiebra fraudulenta de Asarco en 2008 y de múltiples acusaciones por presuntos vínculos criminales en la zona dominada por el cártel de los Zetas– estuvo acompañado de la acusación de un intento de soborno por parte de la administración peñista. Larrea declaró a distintos medios que el gobierno central le pidió más de 200 millones de dólares. La furia de Los Pinos no se hizo esperar, y el enfrentamiento se generó a raíz de la contaminación del Río Sonora.

La disputa con Germán Larrea no fue un dato menor. Era la demostración de que el gobierno de Peña Nieto, envuelto en su propia narrativa triunfalista, se peleaba con un sector muy influyente de la élite económica, al mismo tiempo que ocurrían crímenes y persecuciones en las poblaciones más humildes. Algo que el mismo Napoleón –tan admirado por el primer mandatario– sabía que no era recomendable para la estabilidad del Estado: pelearse al mismo tiempo con los de arriba y los de abajo.

La matanza de Tlatlaya

El 30 de junio ocurrió una matanza de 22 personas en el pequeño municipio de Tlatlaya, Estado de México. La información fue minimizada por los medios estatales y nacionales. El gobernador, Eruviel Ávila, afirmó que se trató de un “enfrentamiento” entre soldados y una presunta banda de secuestradores y narcotraficantes pertenecientes al cártel de los Guerreros Unidos. La procuraduría estatal llegó al lugar, no preservó el sitio y se hizo una intensa operación de control de daños para no manchar el triunfo anticipado de las reformas estructurales peñistas.

“El ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas. Lamentablemente, un militar resultó herido, pero el ejército, en su legítima defensa,

actuó y abatió a los delincuentes”, declaró Eruviel Ávila al día siguiente de la matanza, el 1 de julio. Ese mismo día se celebró en Toluca un cónclave privado, de muy alto nivel, con los secretarios de Gobernación –Miguel Ángel Osorio Chong–, de Hacienda –Luis Videgaray–, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República –Aurelio Nuño–, así como 21 gobernadores del PRI, incluyendo al anfitrión Eruviel Ávila y al dirigente nacional priísta César Camacho, ex gobernador mexiquense también. Tras ocho horas de encuentro, al final llegó “por sorpresa” el primer mandatario, Enrique Peña Nieto.

La versión oficial es que este encuentro, llevado a cabo horas después de la masacre de 22 jóvenes, fue para hacer una “pausa en el camino”, a dos años de la recuperación de la Presidencia de la República por parte del PRI. Las versiones extraoficiales indican que no sólo se habló del retorno del tricolor y de las elecciones federales de 2015. Los mandatarios estatales priístas discutieron, sobre todo, el tema de la seguridad pública, y en especial el caso del Estado de México, cuyos índices de violencia se dispararon hasta convertirla en la entidad más insegura en 2013, con una tasa de 47 mil 778 delitos por cada 100 mil habitantes, y una nueva oleada criminal que requirió la intervención de la Gendarmería Nacional en el municipio de Valle de Bravo, donde se mencionaba la disputa entre el cártel de los Guerreros Unidos y La Familia Michoacana.

La matanza de Tlatlaya no pasó desapercibida en ese encuentro. Menos las contradicciones entre lo ocurrido y la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. La masacre aceleró las versiones sobre la remoción de Eruviel Ávila y su presunta incapacidad para gobernar. Su administración había sido “intervenida” por el gobierno federal desde mayo de 2014: con la venia de Peña Nieto, se designó a José Manzur Ocaña, empresario y político vinculado al Grupo Atlacomulco, como Secretario de Gobierno; a Alejandro Jaime Gómez Sánchez como nuevo procurador; y a Damián Canales Mena como nuevo titular de Seguridad Pública en la entidad.

En otras palabras, la matanza que trataron de ocultar era un severo golpe también para el gobierno federal. Falló la estrategia de “intervención” desde el centro, y el Estado de México, la entidad cuyos hilos aún mantiene Peña Nieto desde Los Pinos, es considerado como bastión electoral y económico del grupo en el poder. No pueden permitir que se les salga de control, a pesar de que la inseguridad es una herencia directa del peñismo.

El escándalo de Tlatlaya reventó cuando la agencia informativa norteamericana Associated Press (AP) publicó el 11 de julio que las 22 personas fueron ejecutadas por el

ejército y que no fallecieron durante un enfrentamiento, sino que fueron secuestrados, torturados y ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. Esta versión fue retomada por varios medios norteamericanos.

Ante el escándalo inminente, la PGR atrajo la investigación. La CNDH, entidad autónoma que supuestamente hizo su propia investigación, tuvo que meterle reversa a su apresurada versión preliminar que le daba la razón a la versión inicial que protegía a los soldados. HRW afirmó que era poco creíble la versión de que sólo tres soldados actuaron por cuenta propia para ejecutar a 22 personas, y luego convencieron a todo el gobierno mexicano de que fue un tiroteo.

Comenzaron a ser investigados, en medio de un gran hermetismo, los soldados integrantes del 102 Batallón de Infantería, acantonados desde 2010 en San Miguel Ixtapan, al sur del estado. Doce integrantes de ese batallón fueron arrestados y se les comprobó nexos con el cártel michoacano de La Familia, específicamente con Johnny Hurtado, alias “El Fish”, a quien el gobierno mexiquense considera el principal responsable de la ola de secuestros en Valle de Bravo.

Tlatlaya es un municipio conectado con las otras comunidades de la Tierra Caliente de Guerrero y de Michoacán, donde operan grupos armados presuntamente vinculados con la guerrilla y con cárteles de la droga, especialmente con los Guerreros Unidos y Los Rojos, células delictivas derivadas del cártel de los Beltrán Leyva, y con La Familia y Los Caballeros Templarios, que operan en Michoacán.

En Tlatlaya ocurrió antes otra matanza similar que quedó impune. En agosto de 2008, al menos 23 personas, incluyendo a varios menores, fueron ejecutadas por agresores que llegaron con rostros cubiertos y vestimenta militar, según el relato del columnista Miguel Ángel Granados Chapa, quien dio a conocer el episodio en *Plaza Pública*. La columna “Matanza silenciada” consignó que, horas después de la masacre, elementos del ejército recogieron los casquillos de las AR-15 y AK-47 y limpiaron la escena del crimen. Los soldados despojaron a los lugareños de sus celulares y los amenazaron: si denunciaban, sufrirían las consecuencias.

Y eso sucedió. La matanza de agosto de 2008 en Tlatlaya nunca se investigó. Sólo algunas organizaciones no gubernamentales consignaron este episodio. En el Estado de México gobernaba Enrique Peña Nieto, preocupado al máximo porque ningún otro episodio similar o peor que la represión en San Salvador Atenco interrumpiera su imparable ascenso hacia la Presidencia de la República.

En 2014, la situación fue diferente. El papel de la prensa norteamericana fue determinante. Dos meses después de la

matanza del 30 de junio, en medio del escándalo provocado por la divulgación en medios internacionales y nacionales del testimonio de una sobreviviente, la PGR confirmó que consignaría a tres militares implicados en los hechos de Tlatlaya. Los soldados “incurrieron en exceso de fuerza”, afirmó el procurador general, Jesús Murillo Karam, acompañado por su homólogo militar Gabriel López Benítez, en una versión todavía más enredada y poco creíble del caso.

Según esta versión, las pruebas establecieron que los militares ingresaron en la bodega en la que se encontraban los 22 presuntos delincuentes y realizaron disparos después de un enfrentamiento con hombres armados, que duró entre ocho y diez minutos. “Al cesar los disparos, ingresaron tres elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tienen justificación”, afirmó Murillo Karam (*El Universal*, 1 de octubre de 2014, p.1).

Horas antes de que Murillo pretendiera darle un nuevo giro al caso de Tlatlaya, en el Sur profundo mexicano detonó otra crisis de seguridad pública de dimensiones inimaginables. El 26 y 27 de septiembre, en el municipio de Iguala, Guerrero, a unas tres horas del Distrito Federal, cercano también a la zona de Tierra Caliente en el Estado de México y ante la presencia del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron asesinados seis jóvenes y secuestrados 43 normalistas del municipio de Ayotzinapa, Guerrero.

Iguala. El baile del terror

La tarde del viernes 26 de septiembre, el alcalde perredista del municipio de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, celebraba junto con más de tres mil acarreados el segundo informe de su esposa y socia, María de los Ángeles Pineda, directora del DIF municipal y claramente perfilada para ser su sucesora al frente de la alcaldía. Después del informe oficial, la llamada “pareja imperial” de Iguala fue a festejar en un salón privado de baile.

Abarca y su esposa eran intocables en Iguala, a pesar de los innumerables testimonios sobre su corrupción, sus amenazas violentas contra opositores y sus vínculos con el cártel conocido como Guerreros Unidos. Contaban con el firme apoyo de la corriente perredista Nueva Izquierda, mejor conocida como “Los Chuchos”, que acababan de ganar nuevamente la presidencia nacional del principal partido de izquierda. También tenían a otro aliado: el coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 Batallón de Iguala, quien asistió al informe de la directora del DIF municipal. A nivel estatal, el gobernador Ángel Aguirre y su procurador

Iñaki Blanco no realizaron ninguna acción contundente para frenar los excesos y crímenes de Abarca.

El coronel Aranda Torres estuvo antes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, otra plaza “caliente” por la disputa de los cárteles del Golfo y Los Zetas. Llegó a Iguala el 5 de octubre de 2011 y continuó con la buena relación que el 27 Batallón sostuvo con el ex alcalde y ex senador perredista Lázaro Mazón, transformado en 2014 en dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de Andrés Manuel López Obrador.

En su artículo “La matanza de Iguala y el ejército”, Luis Hernández hizo el siguiente apunte sobre la relación del militar y los hechos de Iguala el 26 de septiembre: “Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, ‘él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al término del festejo y aseguró que no pasó nada’” (*La Jornada*, 18 de noviembre de 2014, p. 17).

Abarca bailó cumbia durante más de una hora “al ritmo de la Luz Roja de San Marcos” —como él mismo declaró en entrevista radiofónica—, mientras en las arterias principales de su municipio se produjo una de las cacerías más sanguinarias contra un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, famosa por ser la formadora de muchos luchadores sociales de Guerrero, entre ellos el guerrillero Lucio Cabañas, en los años sesenta y setenta.

El odio a los *ayotzinapos*, como Abarca y la clase política de Guerrero se refieren despectivamente a los originarios de ese municipio, ya había provocado otros episodios violentos. El 12 de diciembre de 2012, dos estudiantes de la Escuela Normal fueron asesinados por elementos policiacos en la Autopista del Sol, en Chilpancingo. El 7 de enero de 2013, otros dos jóvenes de la misma institución fueron atropellados mientras “boteaban”—pedían recursos voluntarios— en la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Ni los gobiernos municipales ni el estatal de Ángel Aguirre Rivero hicieron nada sustancial para investigar estos crímenes y evitar que se repitieran.

La noche del 26 de septiembre, un grupo de poco más de 50 estudiantes de primero y segundo grado de Ayotzinapa buscaban también “botear” para dirigirse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, según la versión oficial. No imaginaron que iban a ser perseguidos, balaceados, secuestrados, torturados, incendiados, como en

una réplica del Holocausto nazi al estilo mexicano, en algún paraje de Guerrero.

Según las investigaciones preliminares de la Procuraduría General de la República, sus restos fueron arrojados en bolsas de plástico a un río de Cocula, municipio colindante con Iguala, después de que sus cuerpos fueron calcinados en una hoguera que duró más de 14 horas y fue alimentada con diésel y leña, sin que nadie se diera cuenta de la pira humana que ocurría a unos cuantos kilómetros de Iguala, y sin que el batallón del ejército, acantonado en la zona, interviniera. El móvil de este crimen colectivo no quedaba claro a principios de noviembre de 2014. Sólo se les adjudicó a los sicarios y matones de los Guerreros Unidos que se las “cobraron” contra normalistas que ni estaban dedicados al narcotráfico ni afectaban su negocio. Menos se esperaba que este episodio creciera como una hoguera nacional hasta convertirse en la tragedia mexicana más vergonzosa y humillante para una sociedad anestesiada por el supuesto *Mexican Moment*.

Los primeros relatos de la noche del 26 de septiembre mencionaron que había seis muertos y 25 heridos como saldo del ataque de más de treinta policías municipales contra tres autobuses que trasladaban a los normalistas de Ayotzinapa, a los que persiguieron por la ciudad. Hubo otro ataque contra un autobús de la empresa Castro Tour, donde viajaban adolescentes jugadores del equipo de fútbol Los Avispones, de tercera división, y que fueron confundidos por los agresores con estudiantes normalistas.

El camión de Los Avispones se desbarrancó en la carretera de Iguala a Chilpancingo. Les dispararon más de 170 balas. Fallecieron el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz y el futbolista David José García Evangelista, de apenas 14 años de edad. Un taxista que pasaba por ahí fue herido también, y su pasajera Blanca Montiel Sánchez murió en el acto. Abarca bailaba y bailaba, mientras en las calles de su municipio mataban a tres estudiantes de Ayotzinapa: Daniel Solís Gallardo, de Zihuatanejo, Aldo Gutiérrez Solano, de Ayutla, y Julio César Mondragón, apodado por sus compañeros como “El Chilango”. Los otros 43 eran secuestrados por policías municipales bajo su mando. El cuerpo de Julio César Mondragón fue hallado la mañana del sábado 27 de septiembre en el periférico de Iguala. Estaba tirado en el suelo, con muestras de tortura. Su rostro desollado, sin ojos, demostraba la violencia sanguinaria que se ejerció contra él y los normalistas. La imagen de este muchacho, de apenas 22 años, dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. “El desollado” fue la primera y clara prueba de que en Iguala había ocurrido un crimen de dimensiones inimaginables.

Los primeros reportes mencionaron a 57 desaparecidos. Dos días después, los padres de los normalistas reclamaban a 43 jóvenes. Denunciaron desde el principio el vínculo de Abarca con el crimen organizado y señalaron al jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, como el responsable de la agresión. Le demandaron al gobernador Ángel Aguirre que actuara de inmediato. Los jóvenes desaparecidos se sumaron a la lista de más de 600 desaparecidos durante el breve gobierno de Ángel Aguirre. El *modus operandi* del secuestro y posterior homicidio masivo recordó a varios observadores lo sucedido en mayo de 2013 en la Ciudad de México, cuando trece jóvenes del barrio de Tepito fueron secuestrados en el bar Heaven, de la Zona Rosa capitalina, debido a una supuesta venganza por el asesinato previo del distribuidor de droga Horacio Vite Ángel, ocurrido días antes en un bar de la colonia Condesa.

Iguala tenía antecedentes, pero ninguno de esas dimensiones trágicas. A pesar de la gravedad, el gobernador Ángel Aguirre no habló del caso sino hasta tres días después, el 29 de septiembre. Mandó a su procurador Iñaki Blanco a interrogar a más de 200 policías municipales. Detuvieron a 22. Aguirre afirmó que su administración había “realizado la parte que nos corresponde en la gobernabilidad, pero también hay situaciones que no solamente son del ámbito estatal” (*Reforma* 1 de octubre de 2014).

Aguirre viajó el 30 de septiembre a la Ciudad de México y se reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su principal respaldo dentro de la administración federal de Peña Nieto. El titular de Hacienda, Luis Videgaray, era su adversario. Desde la crisis de los huracanes Ingrid y Manuel, el manejo desaseado de los millonarios recursos enviados por Hacienda para atender a las familias afectadas sembró el desencuentro entre Aguirre y Videgaray.

Ese mismo día, 30 de septiembre, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda se fugaron. Mientras Aguirre se defendía con el titular de Gobernación, Abarca solicitó una licencia por 30 días al cabildo de Iguala. Aseguró tener la “conciencia tranquila” y se lavó las manos de cualquier responsabilidad en el secuestro de los 43 normalistas. Terminó la sesión y Abarca se fugó por la puerta trasera del municipio. Cuando llegaron los elementos de la procuraduría estatal, el alcalde bailador ya había tomado camino rumbo a Temixco, Morelos.

Un día antes de su fuga, el lunes 29 de septiembre, Abarca tuvo un encuentro privado con Jesús Zambrano, dirigente nacional saliente del PRD, en el Sanborn's que se encuentra en la esquina de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y

División del Norte. Sólo se supo de este encuentro un mes después. Zambrano se justificó y defendió señalando que le pidió a Abarca que se “entregara” y que pidiera licencia. Éste le repitió su misma versión: que bailaba y se enteró de una “provocación” de los estudiantes de Ayotzinapa. Según la columna de Héctor de Mauleón, Zambrano se citó a las cinco de la tarde del 29 de septiembre con Abarca, en la Ciudad de México. Le advirtió al gobernador Ángel Aguirre de su encuentro: “Ángel, voy a verme con Abarca para decirle que tiene que separarse del cargo”. Aguirre le contestó a Zambrano: “Coincido. Debe ser una cosa inmediata”.

Zambrano le preguntó a Abarca qué había sucedido, y el alcalde le repitió la misma versión que le dio a Joaquín López Dóriga en su programa de radio: bailaba en el evento de su esposa; se fue a un restaurante por invitación de sus hijos y su cónyuge; no se enteró de lo que había hecho la policía hasta que su secretario particular le llamó para informarle que había unos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se habían llevado unos camiones y que “había disparos”. Según Abarca, la orden que le dio a los policías fue: “no caigan en la provocación”.

—Oye, presidente —le interrumpió Zambrano a Abarca— ¿sabes que nadie te va a creer eso? No puedes decir que no tienes responsabilidad. Aunque fuera por omisión, tuviste responsabilidad (Columna “En Tercera Persona”, Héctor de Mauleón, *El Universal*, 30 de octubre de 2014).

Otras versiones indican lo contrario. Desde las primeras horas del enfrentamiento, Pedro David López, vocero de los estudiantes de Ayotzinapa, explicó a la prensa que sus compañeros estaban “boteando, se habló con los choferes de los camiones y accedieron a hacernos el favor. No fue un rapto o una amenaza contra el chofer. No lo íbamos a hacer porque éramos estudiantes... Los autobuses ya habían bajado a sus pasajeros” (*La Jornada*, 28 de septiembre de 2014, nota de Sergio Ocampo).

Las contradicciones de Peña en Guerrero

Si Aguirre tardó cuatro días para encarar la tragedia de los seis muertos y los 43 desaparecidos, Enrique Peña Nieto dilató diez días para mencionar públicamente, en un enigmático mensaje por televisión, que “lamentaba” de manera particular “la violencia que se ha dado” y que se tratara de “jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala”. No habló de desaparición forzada. No mencionó ejecuciones. No le puso ningún nombre al crimen colectivo que estaba ocurriendo en esos días ante el escrutinio de toda la

comunidad internacional. La pretensión era muy clara: el Presidente de la República evadía cualquier señalamiento que hiciera corresponsable a las fuerzas federales y a la Procuraduría General de la República, al menos por omisión, colusión o comisión, en los hechos ocurridos en Iguala.

Peña Nieto giró “instrucciones” a las instituciones del gabinete de seguridad nacional para que contribuyeran “al esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y a aplicar la ley de manera estricta”, en el clásico lenguaje burocrático y distante que suelen utilizar los políticos cuando no desean involucrarse. Peña Nieto no se ofreció a visitar Iguala, menos el estado de Guerrero, a pesar de que en dos años realizó más de diez giras acompañado por Ángel Aguirre, y anunció más de 37 mil millones de pesos de recursos públicos para los principales afectados por los huracanes de 2013 y para su Cruzada Nacional contra el Hambre, en los municipios más pobres de esa entidad.

Apenas el 7 de noviembre de 2013, un año antes de la tragedia de Iguala, Peña Nieto encabezó un acto para dar a conocer el ambicioso Plan Nuevo Guerrero, con inversiones millonarias y tres ejes para transformar esa entidad en un ejemplo de su nueva política de desarrollo social, tras los desastres naturales provocados por los huracanes Ingrid y Manuel.

Peña Nieto afirmó que el Plan Nuevo Guerrero consistiría en: a) Inversión en infraestructura que incluyera el Puerto Balsas, la autopista Interoceánica; un Plan de Conectividad para dar fibra óptica; un Plan Hídrico para rehabilitar y construir nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo; b) Proyectos sociales para la productividad, incluyendo la construcción de Ciudad Mujer; el respaldo de 24 de los 81 municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre; c) Proyectos sociales con participación ciudadana, como la puesta en marcha de 282 de 500 comedores, el Programa de Empleo Temporal, el Programa de Escuelas de Excelencia (que no incluyó a la Normal de Ayotzinapa) y programas de reforestación y restauración de terrenos.

En el optimismo absoluto, Peña Nieto afirmó que “la acción que el gobierno de la República está emprendiendo significa también que volteemos los ojos hacia el Sur del país, porque como lo hemos apuntado, lo que el gobierno está impulsando realmente es buscar un desarrollo armónico igualitario para todo el país”. El gran artífice de ese millonario Plan Nuevo Guerrero fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien presumió que a través del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) ya se habían destinado 1,484 millones de pesos en apoyos parciales inmediatos y estaban “en

vías de autorización poco más de 20 mil millones de pesos para el ejercicio de 2014”. En total, Videgaray anunció 37 mil 425 millones de pesos “listos para ser ejecutados” en 2014 y otros 30 mil 410 millones de pesos de 2015 a 2018. Una inversión que no tiene comparación con otra entidad.

El único detalle es que el Plan Nuevo Guerrero, inspirado por Videgaray y apoyado por el senador perredista de la entidad, Armando Ríos Pitter, no contempló el problema de la inseguridad pública, señalado por los habitantes como el de mayor preocupación. El Plan Nuevo Guerrero pretendió evitar el “contagio” de la crisis de Michoacán, la entidad que ocupó la atención nacional e internacional a raíz de la crisis de seguridad y el avance del narcopoder encabezado por Los Caballeros Templarios.

Inspirado por esa bolsa multimillonaria de recursos presupuestales, Ángel Aguirre presumió que “ningún gobierno de la época contemporánea había volteado, verdaderamente, los ojos hacia el sur, hacia Guerrero, para darle el trato que, por justicia, nos corresponde” (versiones estenográficas, 7 de noviembre de 2013). Para nadie era un secreto que había una buena relación entre Ángel Aguirre y Peña Nieto. Aguirre se retiró del PRI cuando este partido designó en 2010 a Manuel Añorve como candidato a la gubernatura. Añorve pertenece al grupo de Manlio Fabio Beltrones, el poderoso ex gobernador de Sonora, quien era adversario interno de Peña Nieto en la lucha por la candidatura presidencial priísta de 2012. Aguirre supo aprovechar esta rivalidad a su favor para salirse del PRI, pero mantener el apoyo del Grupo Atlacomulco.

Tampoco era un secreto que Aguirre tenía muy buena relación con el grupo dirigente de “Los Chuchos” en el PRD. Gracias a ellos, él y Abarca fueron candidatos a gobernador y presidente municipal, junto con una decena más de políticos guerrerenses. Aguirre apoyó de manera abierta y con recursos la contienda interna del 2014 por la dirigencia nacional del PRD, a favor de Carlos Navarrete, el sucesor de Zambrano.

Por si se necesitaran más elementos para hablar del vínculo entre Peña, Aguirre, “Los Chuchos”, Abarca y la esposa María de los Ángeles Pineda, cuyos vínculos familiares con el cártel de los Beltrán Leyva y con los Guerreros Unidos había sido ya investigado, ella fue inscrita en el número seis en el orden de prelación como integrante de “Nueva Izquierda-Poder Campesino Popular” en la lista de candidatos a consejos estatales del PRD. La tuvieron que “bajar” porque ya se había fugado con su marido.

El baile del terror se convirtió muy pronto en el baile de los deslindes políticos. Pero la compuerta que se abrió en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas fue apenas el inicio de una crisis mayúscula: en la búsqueda de los jóvenes aparecieron más de 30 narcofosas.